

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 23 de julio de 2020

Auto Interlocutorio No. 161

MAGISTRADO PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	761111-33-33-001-2019-00111-01.
DEMANDANTE:	LILIANA PATRICIA HENAO LEÓN Y OTROS
DEMANDADO:	RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OTROS
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA AUTO DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARÓ LA CADUCIDAD DEL PRESENTE MEDIO DE CONTROL.

Aprobada en Sala y Acta de la fecha. Convocatoria No. \_\_del.

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio nro. 574 del 11 de junio de 2019 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Buga que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de reparación directa.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA, el señor Yury Ricardo Díaz y otros demandaron a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que paguen los perjuicios de índole material y moral ocasionados por la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, basado en normas contrarias a la Constitución Política y las leyes que regulan la materia.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 574 del 11 de junio de 2019<sup>1</sup>, el Juzgado Primero Administrativo de Buga rechazó la demanda por caducidad del medio de control de reparación directa, bajo los siguientes argumentos:

Dijo que la demanda tiene como objeto la indemnización de los demandantes por la exclusión del señor Yury Ricardo Díaz de la lista de auxiliares de la justicia, lo que a su criterio constituye un error judicial, el cual se configuró en las siguientes providencias: 1) el auto del 15 de mayo de 2014 proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga y 2) el proveído del 20 de septiembre de 2016, proferido por el Tribunal Superior de Buga Sala de Familia en segunda instancia, que confirmó la decisión.

<sup>1</sup> Folio 70-71 del expediente.



Informó que consultado el enlace de procesos de la rama judicial, evidenció que la providencia proferida por el Tribunal Superior de Buga, Sala Familia, fue notificada por estado del 21 de septiembre de 2016 y quedó ejecutoriada el 26 de septiembre de 2016, por tanto, el término para incoar la demanda de reparación directa inició el 27 de septiembre de 2016 y culminó el 27 de septiembre de 2018, lo que le permitió concluir la configuración de la caducidad del medio de control.

Además, resaltó que la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 19 de febrero de 2019, es decir, cuatro meses después de finalizar el término de dos años para presentar la demanda, razón por la cual, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 169 del CPACA, rechazó la demanda.

#### IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación<sup>2</sup> argumentando lo siguiente:

Que el término de caducidad del medio de control de reparación directa debe contarse a partir del momento en que quedó en firme el fallo de tutela que dejó sin efectos el pronunciamiento emitido por el Tribunal Superior de Buga el 20 de septiembre de 2016.

Finalmente solicitó de manera subsidiaria que se aplique el término de prescripción regulado en el artículo 140 del CPACA, *“que al tratar sobre la reparación directa, no las supedita a la simple acción, sino también, a la omisión y como puede observarse, el perjuicio no solo se derivó de la acción, sino de la omisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito, al no revertir su actuar, dando cumplimiento a la sentencia de tutela de la Honorable Corte Suprema de Justicia y a la providencia del honorable tribunal superior que dio cumplimiento a la sentencia de tutela STC559-2017 declarando la nulidad de lo actuado, además de hacer caso omiso a su propio auto de fecha 15 de marzo de 2017.”*

#### V. CONSIDERACIONES:

##### 5.1 Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado contra la providencia de primera instancia.

Además, de conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto que rechaza la demanda es susceptible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala lo siguiente:

---

<sup>2</sup> Folio 73-74 del expediente.



**“Art. 243.-** Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

“ ... ”

## 5.2 Problema Jurídico

En atención al recurso de apelación interpuesto, corresponde al Despacho determinar si se debe confirmar o revocar la decisión del Juez de primera instancia que rechazó la demanda de reparación directa, por operar el fenómeno de caducidad del medio de control de reparación directa.

## 5.3 El ejercicio oportuno de la acción

El Consejo de Estado (2014)<sup>3</sup>, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. De ahí, que las partes les correspondan asumir la carga procesal de impulsar el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Cabe resaltar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

### 5.3.1 Caducidad – recuento normativo y jurisprudencial:

Para comenzar, debe decirse que en el presente asunto el medio de control ejercido es el de reparación directa, contenido en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 y, en cuanto a la oportunidad para presentar la demanda, el literal (i) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, señaló:

**Artículo 164.** La demanda deberá ser presentada:

[...]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

[...]

- i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de **dos (2) años**, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia **de la acción u omisión causante del daño**, o de cuando **el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo** si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 2009, expediente nro. 36.834 (auto). Reiterado en la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 26 de febrero de 2014, radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588).



Importante es transcribir el siguiente pronunciamiento, en el cual el Consejo de Estado (2014)<sup>4</sup> sobre el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del C.P.A.C.A. manifestó:

El propósito esencial de la caducidad es evitar que las diversas situaciones generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguridad jurídica al convertirlas en situaciones jurídicas consolidadas. (...) la demanda de reparación directa caducará, por regla general, al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. (...) en algunos casos resulta necesario identificar el momento preciso en el cual se configura o consolida el daño para poder computar el término de caducidad del medio de control, situación que reviste de complejidad si se tiene en cuenta que en relación con el tiempo no todos los daños pueden ser verificados en un momento exacto, pues es posible que sus efectos se prolonguen en el tiempo o incluso se consoliden en una etapa posterior a la fecha de ocurrencia del hecho dañoso.

Por otro lado, el Consejo de Estado (2019)<sup>5</sup> ha manifestado que cuando la demanda incoada bajo el medio de control de reparación directa cuyas pretensiones estén encaminadas a establecer la responsabilidad por error judicial por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de dos años se contabiliza a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia contentiva del error:

Cuando el hecho dañoso es una providencia respecto de la cual se predica la existencia de un error, la Sala, de manera reiterada, ha considerado que el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de aquella y que se agote la instancia respectiva.

Se concluye que cuando el daño alegado se deriva de un error jurisdiccional, el término de caducidad inicia su cómputo a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial causante del perjuicio.

### CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 320<sup>6</sup> del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306<sup>7</sup> del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose **solamente** sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

<sup>4</sup>Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 2014, Consejero Ponente Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2019, radicado nro. 25000-23-26-000-2011-00631-01(50955).

<sup>6</sup> Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. (...).

<sup>7</sup> ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



En el caso concreto se observa que el daño antijurídico alegado por la parte actora tiene su origen en el error judicial cometido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga al proferir el 15 de mayo de 2014 una providencia a través de la cual excluyó al señor Yuri Ricardo Díaz Hernández de la lista de auxiliares de la justicia<sup>8</sup>, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Buga en proveído del 20 de septiembre de 2016<sup>9</sup>.

El *a quo* rechazó la demanda de reparación directa por caducidad, pues consideró que el término de 2 años inició una vez la providencia proferida por el Tribunal Superior de Buga el 20 de septiembre de 2016 fue notificada y quedó ejecutoriada, el 26 de septiembre de 2016, por lo tanto, concluyó que el término de caducidad del medio de control de reparación directa venció el 27 de septiembre de 2018. Adicionalmente, manifestó que en el presente asunto la conciliación prejudicial presentada no interrumpió el término de caducidad, ya que fue presentada con posterioridad a la caducidad del medio de control de reparación directa, el 19 de febrero de 2019<sup>10</sup>.

Contra la decisión tomada por el Juzgado Primero Administrativo de Buga, el apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación y argumentó que el término de caducidad del medio de control de reparación directa por error jurisdiccional debió contabilizarse cuando quedó en firme el fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia el 25 de enero de 2017<sup>11</sup> que dejó sin efectos la providencia del 20 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

Subsidiariamente, solicitó que se aplique el término de prescripción establecido en el artículo 140 del CPACA, ya que el perjuicio alegado no solo se derivó de la acción, sino también de la omisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito al no dar cumplimiento al fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia y revertir su actuación. Al respecto, el Despacho considera que dicha solicitud no tiene vocación de prosperidad, ya que: 1) el artículo 140 del CPACA no hace alusión a prescripción alguna y 2) dicha manifestación no fue presentada en la demanda como pretensión, ya que la misma solo se encaminó al pago de los perjuicios de índole material y moral causados como consecuencia de la orden de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia.

La Sala no puede desconocer el precedente jurisprudencial que consideró que la caducidad en el medio de control de reparación directa por error judicial se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene dicho error<sup>12</sup>, por tanto, en el presente asunto la fecha de expedición de la sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia, el 25 de enero de 2017, no es

<sup>8</sup> Folio 14-19 del expediente.  
<sup>9</sup> Folio 8-14 del expediente.  
<sup>10</sup> Folio 8-9 del expediente.  
<sup>11</sup> Folio 26-30 del expediente.  
<sup>12</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2020, radiación nro. 52001-23-31-000-2006-01805-01 (52358).



el momento en que inicia el cómputo de caducidad del medio de control presentado, pues el artículo 67 de la Ley 270 de 1996<sup>13</sup> que establece los presupuestos del error jurisdiccional, no se refiere, cuando impone al demandante la carga de recurrir las decisiones judiciales oportunamente, a la tutela como un recurso, puesto que, esta acción no tiene otra finalidad que lograr la protección inmediata y expedita de los derechos fundamentales, y de ninguna manera constituye otra instancia judicial dentro del proceso. En efecto, se refiere a los recursos ordinarios procedentes para ejercer el control normal de las actuaciones judiciales que, en efecto, el demandante agotó.

En consecuencia, para el Despacho la fecha a partir de la cual debe computarse el término de caducidad del medio de control de reparación directa es a partir del día siguiente a la ejecutoriada de la providencia del 20 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Superior de Buga, el 26 de septiembre de 2016<sup>14</sup>, por tanto, el demandante tenía hasta el 26 de septiembre de 2018 para presentarla, sin embargo, fue radicada extemporánea el 3 de mayo de 2019<sup>15</sup> y además, la solicitud de conciliación prejudicial fue realizada 19 de febrero de 2019.

Por lo anterior, esta Sala de Decisión confirmara la decisión adoptada por el *a-quo* mediante providencia nro. 574 del 11 de junio de 2019 que rechazó la demanda por haber operado la caducidad, conforme lo señala el numeral 1 del artículo 169 del CPACA.

En consecuencia, se

### RESUELVE:

**PRIMERO.-CONFIRMAR** el auto interlocutorio nro. 574 del 11 de junio de 2019 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Buga.

**SEGUNDO: DEVUÉLVASE** al Juzgado de Origen, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,**

**Los Magistrados**

<sup>13</sup> **ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL.** El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

<sup>14</sup> <https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=%2fpL4ZBor0JFIMCEcZ0ARAZIISeQ%3d>

<sup>15</sup> Folio 7A del expediente.

Vo.Bo.Secretario  
Nathaligg

Radicación : 2019-00111-01  
Medio de control : Reparación Directa  
Demandante : Liliana Patricia Henao León y otros  
Demandado : Nación- Rama Judicial y otros



**PATRICIA FEUILLET PALOMARES  
VALENCIA**

**LUZ ELENA SIERRA**

**OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT**

2019011100001104